



América Latina: El fin de una era

Mark Weisbrot

Invierno 2006

Center for Economic and Policy Research
1611 Connecticut Avenue, NW, Suite 400
Washington, D.C. 20009
202-293-5380
www.cepr.net

Contenido

Introducción	3
Causas y consecuencias: El prolongado fracaso económico de América Latina.....	4
El colapso de un cartel.....	6
Ajustes en la economía estadounidense y el rol de China.....	11
La energía y las industrias extractivas de América Latina	12
Un futuro más brillante- logros de Argentina, Venezuela y Bolivia.....	13
El desafío de los nuevos gobiernos:.....	15
Los cambios en la región y su relevancia en Brasil	16
Washington se enfrenta a Venezuela	17
Diferencias en la región no alteran tendencia.....	21
Algunos desafíos y el avance de la nueva tendencia	22

Acerca de los autores

Mark Weisbrot es Economista y Co-Director del Centro de Investigación Económica y de Políticas (*Center for Economic and Policy Research—CEPR*) en Washington, DC. Este artículo analítico fue publicado en la revista académica, *International Journal of Health Services* (Revista Internacional de Servicios de Salud).

Reconocimientos

Los autores extienden su agradecimiento a Dean Baker, Rebecca Ray y Dan Beeton por sus comentarios, y a Kunda Chinku por su asistencia en la investigación y la edición de este informe.

Introducción

Los cambios que han ocurrido en América Latina en los últimos años, forman parte de una transformación que está marcando el nacimiento de una nueva era. Tomando prestada una interpretación utilizada en el marco de la Guerra Fría que aún prevalece en los círculos de política exterior de Estados Unidos: una vez más hemos sido testigos del colapso del Muro de Berlín y de la formación de nuevos estados independientes. Una región que ha sido dominada por Estados Unidos durante más de un siglo ha, en su mayoría, roto las cadenas que a éste la ataban. Evidentemente quedan todavía fuertes lazos de índole comercial, política, cultural e incluso militar; pero al igual que con los estados de la extinta Unión Soviética después de 1990, estos lazos no tienen las mismas implicaciones económicas o políticas que tuvieron hace una década o incluso, hace unos cuantos años.

Estos cambios han sido mal comprendidos – y extensamente subestimados – en amplios sectores del espectro político, aunque ciertamente han sido notados. Difícilmente pasa un día sin que haya relevantes advertencias de que la región – o al menos buena parte de ella – va en camino hacia la ruina “populista”, o hacia algo peor.

La derecha – incluyendo la administración Bush – ve este proceso a través del prisma de la Guerra Fría, con el eje Castro-Chávez-Evo Morales que representa una amenaza estratégica a Estados Unidos. Lazos imaginarios o implícitos con el terrorismo y el narcotráfico (con pocas o ninguna evidencia de por medio) se agregan en ocasiones para lograr mayor efecto, como cuando el Departamento de Estado suspendió la venta de armamento a Venezuela el pasado 15 de mayo por “falta de cooperación” en el combate al terrorismo.

La perspectiva centro-liberal es menos belicosa, pero igualmente pesimista frente a lo que está sucediendo en la región. Foreign Affairs ha publicado tres artículos desde principios del año advirtiendo sobre los peligros de la caída de América Latina en manos de la izquierda populista, así como del lamentable estado de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Los reportes de noticias, los editoriales y páginas de opinión de los principales periódicos estadounidenses llevan en su mayoría la misma temática.

Pero desde el punto de vista de la vasta mayoría del hemisferio, incluyendo a gente en Estados Unidos, existen muchas razones para sentirse optimistas. Tal y como el presidente de Francia, Jacques Chirac, comentó durante una reciente visita a Sudamérica, “hay en América Latina un vigoroso movimiento a favor de la democracia, un movimiento que está creciendo.” Y agregó que los recién electos presidentes de izquierda no pueden ser motivo de preocupación debido a que fueron electos en comicios libres y democráticos. Además, existen todas las razones para creer que los cambios de los últimos años no serán revertidos, y que la región seguirá avanzando hacia una mayor independencia económica y política acompañada de una diversificación en el comercio y las finanzas, hacia cierta integración regional y hacia políticas macroeconómicas más exitosas. No todas estas políticas y experimentos económicos tendrán éxito, pero lo que es más importante es que, muy posiblemente, el fracaso económico de largo plazo del último cuarto de siglo será revertido en el futuro previsible y que sus cientos de millones de pobres figurarán entre los principales beneficiados.

Causas y consecuencias: El prolongado fracaso económico de América Latina

La causa más importante del giro hacia la izquierda de América Latina ha sido ampliamente mal comprendida: se trata del fracaso económico de largo plazo de la región. Esto es algo que hasta la mayoría de los críticos del “neoliberalismo” – la palabra que describe las reformas económicas del último cuarto de siglo en América Latina – casi nunca mencionan. Con más frecuencia leemos que estas reformas han tenido éxito para promover el crecimiento, pero que los beneficios han sido para pocos empeorando la desigualdad y la pobreza y alimentando así la inestabilidad política.

Esta explicación deja de lado el cambio más importante y efectivamente histórico, que ha tenido lugar en América Latina a lo largo de los últimos 25 años: el colapso del crecimiento económico. Si ignoramos la distribución del ingreso y nos limitamos a analizar el ingreso por persona – la medida básica del progreso económico empleada por economistas – el último cuarto de siglo ha sido un desastre.

De 1960 a 1980, el ingreso per cápita en América Latina creció en un 82 por ciento, en términos reales – es decir, ajustado por inflación. De 1980 a 2000, creció tan sólo 9 por ciento; y en los primeros cinco años de esta década (2000 a 2005), el crecimiento total fue de un 4 por ciento. Si queremos encontrar en América Latina un crecimiento siquiera cercano al fracaso de los últimos 25 años, tenemos que retroceder más de un siglo y escoger un periodo que incluya ambos, la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Gran Depresión.

Es claro que América Latina tiene también la peor desigualdad en la distribución del ingreso a nivel mundial. El contraste entre los lujosos condominios del fraccionamiento Barra da Tijuca en Río de Janeiro y las favelas de las colinas donde la policía teme adentrarse, o entre los barrios pobres de Caracas y las lujosas residencias de Alta Mira, salta a la vista. Pero la desigualdad en la región no ha crecido dramáticamente a lo largo de los últimos 25 años. Lo que ha fallado es el crecimiento económico que ha privado a una generación y media de cualquier oportunidad de mejoría en su calidad de vida.

Y sin crecimiento, es muy difícil hacer algo contra la desigualdad y la pobreza. Si la economía está creciendo rápidamente, por lo menos es posible redistribuir parte del aumento en el ingreso y en la riqueza hacia aquellos que más lo necesitan. Pero cuando la economía no está creciendo, cualquier mejoría para los pobres debe ser tomada de alguien más – lo que resulta difícil sin el uso de la violencia.

La pobreza y la desigualdad son preocupantemente obvias en América Latina, y se sienten en carne y hueso, tomando la forma de niños de la calle y de limosneros—mientras que el crecimiento económico es un concepto abstracto que la mayoría de la gente no entiende. Por eso resulta comprensible que la principal causa de los cambios políticos en América Latina sea pasada por alto. Sin embargo, el crecimiento económico – que se define primeramente por incrementos en la productividad, es decir, incrementos en la producción por hora de trabajo – es vital, especialmente a lo largo de un periodo de tiempo tan prolongado. Ésta es la principal razón por la que vivimos mejor que nuestros abuelos.

México tendría ahora los niveles de vida de España si su economía hubiese seguido creciendo al ritmo de crecimiento que logró antes de 1980. Habría muchísimo menos mexicanos dispuestos a tomar el riesgo de emigrar ilegalmente a Estados Unidos. Y como estos niveles de crecimiento

anteriores a 1980 fueron buenos pero no espectaculares (en comparación, por ejemplo, con Corea del Sur y con Taiwán), no existe una razón obvia por la que no puedan ser un nivel de comparación pertinente.

En Washington, aquellos que diseñan las políticas se encuentran en una forma especial de negación del fracaso económico de América Latina. Después de todo, ellos han obtenido casi todo lo que han querido: los gobiernos han reducido drásticamente restricciones al comercio internacional y a los flujos de inversión; las empresas públicas han sido privatizadas, incluso los sistemas de seguridad social en muchos países; los gobiernos tienen que operar con presupuestos más restringidos y los bancos centrales son más independientes y más agresivos para combatir la inflación; y las políticas industriales y la planificación del desarrollo, dirigidas en el pasado por el estado, han sido abandonadas.

Pero los resultados acumulados han sido un desastre económico, y es por eso que no resulta sorprendente que en los últimos años los candidatos presidenciales con campañas en contra del “neoliberalismo” han ganado las elecciones en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela. México muy bien puede seguir este camino en julio. La pregunta sobre qué políticas en particular contribuyeron a los numerosos y variados fracasos económicos nacionales es más compleja, y las posibles alternativas para reestablecer el crecimiento y el desarrollo – que empiezan ahora a ser exploradas – varían notablemente según el país que se considere. Pero lo que debe de quedar claro es que lo que ahora estamos atestiguando es una respuesta al fracaso económico que está dando origen a una nueva época, y que – a consecuencia de una serie de revueltas en las urnas electorales, y otras tantas en la calle – varios gobiernos están buscando formas más prácticas y eficaces de hacer funcionar al capitalismo.

La prolongada era del “neoliberalismo” en América Latina aún no ha llegado a su fin – ese fin es apenas el comienzo, por las razones que discutimos más adelante. Lo que realmente define esto como una nueva era es que se ha derrumbado de manera tan rápida, drástica y probablemente irreversible la influencia de Estados Unidos en una región que hasta hace muy poco era su “patio trasero” y que la situación actual realmente no tiene precedentes en la historia moderna del hemisferio.

Este es un cambio dramático, especialmente si consideramos que en la década de los ochenta Washington gastó miles de millones de dólares, y apoyó al asesinato de decenas de miles de inocentes, tan sólo para mantener bajo control a ciertos países centroamericanos que en términos económicos globales pueden ser insignificantes.

El presidente Clinton emitió una insólita disculpa pública por el papel que Estados Unidos jugó en lo que la Organización de Naciones Unidas calificó como “genocidio” en Guatemala, mientras que la participación de Washington en los asesinatos masivos en El Salvador y en la destrucción de Nicaragua que fue incluso mayor y más directa. Aún así, en los últimos años, la misma gente – literalmente en el caso de personal actual y reciente del gobierno, como Elliot Abrams, Otto Reich y John Negroponte – han visto, sin poder hacer nada, como la mayor parte de la región, en términos económicos y de población, se ha salido de su alcance.

El colapso de un cartel

Una razón por la cual la naturaleza histórica de estos cambios no ha sido valorada es que la influencia más poderosa de Washington sobre la región – especialmente en el campo de política económica – nunca ha recibido gran atención, y que esta influencia particular ha colapsado silenciosamente. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional (FMI) que hasta hace poco encabezaba a un poderoso cartel de acreedores que, discutiblemente, era más importante que las otras palancas gubernamentales de poder en Washington – incluyendo el poder militar, paramilitar, diplomático y otras proyecciones de “poder blando” tales como los mecanismos de financiamiento exterior y los “programas de promoción de la democracia.” Este cartel consistía, no en una conspiración, sino más bien en un acuerdo informal –que a pesar de no estar escrito en el cuerpo de ninguna ley ni en los estatutos de las instituciones financieras participantes – era bastante efectivo en términos generales.

Esto ocurría de tal forma que el FMI actuaba como “centinela,” vigilando el acceso que los gobiernos de los países en desarrollo tienen a la mayoría de las otras fuentes de crédito . Si un gobierno no llegaba a un acuerdo con el FMI, este no sería elegible para la mayor parte de los préstamos del Banco Mundial, de los bancos regionales como el importante Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en este hemisferio, de los préstamos y donaciones gubernamentales de los países del G7 (grupo de los siete países más ricos del mundo) y en ocasiones incluso del sector privado.

El FMI, con sus 184 países miembros, siempre ha estado dominado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Técnicamente, los otros países ricos, incluidas las naciones europeas y Japón, podían superar en votos a Estados Unidos (los derechos de voto son proporcionales al sistema de cuotas o contribuciones que dan a los países ricos una enorme mayoría) pero esto virtualmente nunca ha sucedido a lo largo de los últimos 62 años. Durante los últimos 25 años especialmente, este cartel de acreedores tuvo una enorme influencia en el diseño de las políticas del “Consenso de Washington” que fueron adoptadas a lo largo de América Latina y de la mayoría de los otros países de bajos y medianos ingresos. El poder del cartel se extendió mucho más allá del simple control sobre los recursos financieros para influenciar el ámbito político de los países.

Como se ha sabido a lo largo de décadas enteras, el FMI, actuando como “centinela” y asegurando la aplicación de “políticas económicas sólidas,” permitió que Estados Unidos (y en ocasiones otros países ricos) operara a través de una institución de fachada multilateral, neutral, y tecnócrata cuando se presionaba a los gobiernos de los países en desarrollo para que privatizaran sus recursos naturales o para que acumularan un enorme superávit primario para pagar sus deudas. Resulta políticamente mucho más delicado que los funcionarios del gobierno de Estados Unidos dicten públicamente a gobiernos soberanos qué es lo que tienen que hacer. Adicionalmente, y como pudimos ser testigos en la reciente reestructuración de la deuda argentina, los acreedores individuales – incluso los grandes bancos – no tienen esta magnitud de poder en contra de un gobierno que está dispuesto a ir al límite. En una situación de moratoria, el interés individual en llegar a acuerdos para recuperar lo que se pueda, reducir sus pérdidas y mirar hacia el futuro es evidente. Pero se requiere de una fuerza externa – fuera del mercado – para mantener la amenaza de un castigo futuro al gobierno ofensor y defender el interés de los acreedores.

Este acuerdo empezó a fragmentarse después de la crisis económica asiática de fines de la década de los noventa, después de la cual los países de ingresos medios de esa región acumularon enormes reservas monetarias internacionales. Estos países habían sufrido una terrible y humillante experiencia con las condiciones impuestas por el FMI durante la crisis, y aún cuando la acumulación de reservas

de la época posterior a la crisis tenía otras causas, ésta sirvió a su vez como garantía para que los países nunca más tuviesen que aceptar los consejos del Fondo.

Pero fue en América Latina que el FMI fue reducido a la sombra de su propio ser. Argentina incurrió en una moratoria de 100 mil millones de dólares de su deuda a fines del 2001, la moratoria de deuda soberana más significativa de la historia. El sistema monetario y bancario colapsó y la economía siguió encogiéndose. Casi todos asumieron que el gobierno se vería obligado a llegar a un nuevo acuerdo con el FMI para recibir una inyección de recursos extranjeros que le permitiera a la economía volver a crecer.

Pero pasó todo un año sin que se llegara a ningún acuerdo y, cuando finalmente se llegó a uno, no hubo nuevos recursos. De hecho, el FMI sacó alrededor de 4 mil millones de dólares en términos netos— una suma enorme de dinero equivalente a 4 por ciento del PIB – del país en 2002. Sin embargo, a despecho de los expertos, la economía argentina experimentó una contracción sólo durante tres meses después de haber entrado en moratoria, antes de empezar a crecer de nuevo. Cuatro años más tarde, la economía argentina sigue creciendo a un ritmo bastante rápido. De hecho ha experimentado la tasa de crecimiento más alta en el hemisferio – más de 9 por ciento anual durante tres años – a pesar del continuo drenaje de dinero fuera del país para pagar a los acreedores oficiales (el FMI, Banco Mundial, y el BID) que llegó a más de 14 mil millones de dólares entre 2002 y 2003.

El gobierno argentino, bajo el mando de Néstor Kirchner, quien tomó posesión en mayo del 2003, también puso en marcha políticas económicas no ortodoxas que fueron vigorosamente repudiadas por el Fondo, incluyendo el seguir una línea dura en las negociaciones de la deuda en moratoria, que invocó hostilidad de la prensa internacional de negocios, junto con predicciones de un castigo y un estancamiento económico prolongados.

En uno de los diversos enfrentamientos con el Fondo, Argentina incurrió en una moratoria incluso temporalmente en septiembre del 2003 – una acción insólita y sin precedentes que sólo había sido emprendida por estados fracasados como el Congo o Irak. Una moratoria con el Fondo había significado hasta ese momento la amenaza del aislamiento económico, e incluso la negativa a créditos a la exportación necesarios para el comercio. Pero el mundo ya había cambiado y el FMI se echó atrás. El golpe final a la prolongada batalla de Argentina con el Fondo – desde la desastrosa depresión de cuatro años, generada y exacerbada por las políticas macroeconómicas que este organismo respaldó, y a lo largo del desencuentro del 2002, fue la subsecuente recuperación rápida e independiente de la economía. Este golpe no sólo afectó a la credibilidad del Fondo como asesor económico, sino también como impulsador de políticas neoliberales y cobrador internacional.

3.1 ¿Qué diferencia hace el colapso de este cartel de acreedores?

El caso de Bolivia

Veamos a Bolivia hoy, donde el izquierdista y ex líder indígena de la unión de productores de coca, Evo Morales, fue elegido en diciembre pasado con el apoyo electoral más amplio en la historia de Bolivia. Prometió nacionalizar las fuentes energéticas del país que representan la porción más importante de ingresos por exportaciones, y utilizar estos recursos para elevar las condiciones de vida de la mayoría de los pobres y de la población indígena. En realidad esta medida no fue más que un retorno a la constitucionalidad, dado que los actuales contratos con las compañías de energía del extranjero no estaban siendo aprobados por el congreso, tal y como lo requería la ley. El 1.º de mayo Morales anunció que su gobierno estaba efectivamente nacionalizando la industria de gas y petróleo, y que las compañías extranjeras contarían con seis meses para renegociar los contratos existentes.

Muchos detalles quedan por aclararse, y la situación se complica al considerar que Petrobrás, la compañía estatal brasileña de energía, es la principal productora de gas en Bolivia y que este último país sólo puede exportar gas natural (que es la principal exportación energética) por medio de un ducto hacia Argentina y hacia Brasil. Pero el gobierno boliviano ya incrementó los ingresos que recibe de los productores de gas, del 3,4 por ciento al 6,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) como resultado de la ley de hidrocarburos que entró en vigor el año pasado. Este incremento representa una porción comparable a la mayor parte del déficit presupuestario federal de Estados Unidos. La nacionalización del 1.º de mayo elevará aún más estos ingresos, permitiendo que el gobierno cumpla algunos compromisos con los pobres.

Desde entonces, el gobierno boliviano ha anunciado su intención de emprender un ambicioso programa de reforma agraria, que también ha sido visto con hostilidad por la prensa. Según el Ministerio de Desarrollo Rural, a lo largo de los próximos cinco años el gobierno espera poder redistribuir unos 140 mil kilómetros cuadrados de tierra, un área del tamaño de Grecia, entre 2,5 millones de personas – un 28 por ciento de la población.

La administración Bush había expresado su inconformidad con el nuevo gobierno en un par de ocasiones, pero hasta hace muy poco se ha mantenido relativamente cautelosa con sus declaraciones públicas desde que las denuncias que el embajador estadounidense contra Morales sirvieron para que el carismático líder cosechara tantos votos en las elecciones que casi lo llevan a la victoria en el 2002. Pero el 22 de mayo, marcando un inquietante nuevo rumbo, el presidente Bush dijo a la prensa que estaba “preocupado por la erosión de la democracia” en Bolivia y en Venezuela.

Habrán fricciones adicionales en el futuro cercano y menos con relación a políticas para el control de drogas. Por años Washington ha impulsado su agenda de erradicación de drogas en Bolivia, con poca consideración al impacto que esto pueda tener en el ámbito político, económico, ambiental o en la cada vez más indignada población local. Quien quiera que haya visitado Bolivia y atestiguado cuán ubicua es la coca allí, desde el té de coca en los restaurantes y las hojas que la gente mastica como estimulante y alivio del malestar por la altura, sólo tiene que imaginarse lo que significaría para la gente de Estados Unidos que alguien les dijera que deben cooperar con un programa para la “erradicación del café” porque un gobierno extranjero así lo desea con el fin de evitar que otros extranjeros abusen de ese producto. La mayoría en la base electoral de Morales quisiera expulsar a la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) de su territorio el día de mañana, si fuese posible. Morales ha tomado una posición moderada, comprometiéndose a cooperar en la lucha contra la cocaína y el narcotráfico, al mismo tiempo que apoya la legalización de la planta de coca y el desarrollo de nuevos mercados para productos legales. Lo más probable es que la administración Bush considere esta posición como inaceptable.

¿Pero qué puede hacer Washington con este nuevo gobierno ‘problemático’? No mucho. Lo cual es aún más inédito por el hecho de que Bolivia no es Venezuela, el quinto exportador más importante de petróleo, ni es Argentina, que hasta la última depresión de la década de los noventa tenía prácticamente el nivel de vida más elevado al sur de la frontera. Tampoco es un gigante como Brasil, cuyo territorio es tan grande como el territorio continental de Estados Unidos. Aquí se trata del país más pobre de América del Sur con nueve millones de habitantes y una economía que ni siquiera alcanza un milésimo del tamaño de la de Estados Unidos, al tipo de cambio actual. Es una nación lo suficientemente pobre y endeudada para haber calificado para la iniciativa de cancelación de deuda del FMI y el Banco Mundial para Países Pobres y Muy Endeudados (PPME.) Efectivamente, la deuda que Bolivia tenía con el FMI y el Banco Mundial – un 35 por ciento de la deuda extranjera pública total del país – fue cancelada este año después de pasar por una odisea de condiciones durante varios años.

Pero Bolivia es hoy un país libre. El pasado 31 de marzo, después de veinte años de operar continuamente (con excepción de ocho meses) bajo los dictados de acuerdos con el FMI – y con un ingreso por persona increíblemente menor al que había logrado hace 27 años – Bolivia dejó expirar el último acuerdo que tenía con el FMI. El gobierno decidió no buscar un nuevo acuerdo con el Fondo. Una de las primeras preguntas que surgieron al respecto fue ¿qué pasará con el dinero que el país recibe de otras fuentes? Bolivia recibe no sólo préstamos sino donaciones de gobiernos con mayores ingresos y, hasta ahora, incluso las donaciones de países más liberales de la Unión Europea han estado condicionadas a que Bolivia logre la aprobación del FMI. Pero todo parece indicar que este requisito ha desaparecido junto con el acuerdo con el Fondo. La administración Bush cortó la ayuda militar – una insignificancia de 1,6 millones de dólares – y puede reducir otros flujos de recursos relacionados con los esfuerzos antidrogas. El gobierno español expresó alguna preocupación con respecto a la nacionalización de la industria del gas por parte de Bolivia, debido a que Repsol YPF, la compañía petrolera más grande de España, es el segundo productor ahí.

Pero hasta ahora ninguno de los gobiernos ricos ha intentado utilizar la amenaza de recortar los créditos o donaciones como una maniobra para tratar de cambiar las políticas de Bolivia. Es casi seguro que una amenaza así, o incluso una reducción de la ayuda actual, no alteraría el comportamiento del gobierno, por lo que sería inútil y contraproducente desde el punto de vista de estos gobiernos.

El hecho de que hayamos llegado a semejante situación ilustra dramáticamente hasta qué punto han cambiado las relaciones hemisféricas. Hace unos cuantos años un gobierno como el de Evo Morales habría tenido muy pocas expectativas de sobrevivir. Washington habría tenido la capacidad de estrangular económicamente al país – como lo hizo con Haití – para poder derrocar a un gobierno democráticamente electo hace solamente dos años. El gobierno de Haití, el cual era sumamente dependiente de la ayuda extranjera, vio desaparecer virtualmente todo el financiamiento internacional desde el año 2001 en adelante, asegurándose así su caída final con el golpe apoyado por Estados Unidos en marzo de 2004. Para países sumamente pobres y especialmente para aquellos que carecen de aliados o de la atención de la prensa, las viejas reglas siguen estando en vigor – a pesar de que están empezando a cambiar. Y en muchos de los países de bajos ingresos, en África por ejemplo, las principales políticas económicas siguen estando sujetas a la aprobación del FMI.

3.2 Surge un nuevo prestamista

Pero el Fondo ha perdido influencia en los países de ingresos medios, y eso incluye a casi toda América Latina. Y a pesar de que haya recibido poca atención de la prensa, el colapso del cartel de acreedores encabezado por el FMI es por sí mismo, probablemente el cambio más importante del sistema financiero internacional desde el colapso del sistema de cambios fijos de Bretton Woods en 1973. Esto es particularmente cierto para los países en desarrollo.

En América Latina esto coincidió con un importante e inesperado cambio que, combinado con la pérdida de influencia del FMI, ha ayudado a inaugurar la nueva era de independencia. Un nuevo prestamista ha emergido: Venezuela. Cuando Argentina decidió en diciembre pasado dar el último adiós al FMI al pagarle de un sólo golpe el remanente de su deuda de 9 mil 800 millones de dólares (5,4 por ciento del PIB), Venezuela colaboró con 2 mil 500 millones de dólares para la causa. “Si se requiere ayuda adicional para que finalmente Argentina se libere de las garras del Fondo Monetario Internacional, Argentina puede contar con nosotros,” anunció Chávez el 15 de diciembre. La declaración de Kirchner para anunciar esta decisión fue aún más áspera: “[El FMI] ha actuado en nuestro país como promotor y vehículo de políticas que causaron pobreza y sufrimiento en el pueblo argentino,” dijo.

El año pasado Venezuela también se comprometió a comprar bonos de Ecuador por un monto de 300 millones de dólares; en diciembre resultó que Ecuador tenía suficiente demanda para sus bonos que sólo necesitó vender 25 millones a Venezuela, pero el compromiso previo quedó allí como préstamo de última instancia. Chávez había propuesto formalizar esta nueva relación con el establecimiento del “Banco del Sur” para financiar el desarrollo de la región, y ofreció iniciarlo con una contribución de 5 mil millones de dólares. Entretanto, Venezuela también está dando financiamiento a los países del Caribe para la compra de petróleo a precios descontados en el marco de su programa PetroCaribe.

El resultado para Bolivia es que a pesar de su pobreza y subdesarrollo, el nuevo gobierno no tendrá que preocuparse demasiado sobre si Estados Unidos aprueba o no sus acciones con respecto a las empresas extranjeras de energía, con sus negociaciones comerciales (el tratado bilateral de comercio que tanto buscó Washington ahora está prácticamente muerto), con sus políticas macroeconómicas y con sus políticas antidrogas. Cualquier recorte a los financiamientos de Washington, de Europa o de las agencias internacionales de crédito será más que sustituido por el de Venezuela.

Cuando Bolivia estaba a punto de perder 170 millones de dólares en exportaciones de soya a Colombia, como resultado de la firma del tratado de libre comercio entre este último y Estados Unidos, Venezuela hizo su aparición como comprador sustituto.

Esa es la paradoja del nuevo orden hemisférico: ahora es incluso más fácil para un país pequeño y pobre rechazar el “Consenso de Washington” que para los países más grandes de ingresos medios – aún cuando las alternativas para todos se han expandido notablemente.

Venezuela tiene reservas monetarias internacionales de más de 30 mil millones de dólares y cualquier crédito que Bolivia necesitara será pequeñísimo en relación a la capacidad de Venezuela para conceder créditos y ayuda financiera. Tan sólo en el pasado mes de mayo, Venezuela anunció un crédito de 100 millones de dólares para Bolivia y un monto similar para apoyar su propuesta de reforma agraria, así como muchas otras formas de ayuda. Con la diferencia de que los programas de ayuda financiera de Venezuela, a diferencia de los programas de las instituciones financieras internacionales o de los gobiernos del G-7, no conllevan condicionamientos de políticas económicas. Esto hace toda la diferencia del mundo.

Si se miran a través de la óptica de la Guerra Fría, característica de los funcionarios de Washington y de las élites de la política exterior, estos desembolsos e iniciativas forman parte de un intento de conformar un eje “anti-estadounidense”, o bien, son simplemente el medio con el que Chávez está comprando amigos en la región. El propio Chávez, quien ha bautizado su revolución en mención a Simón Bolívar el libertador del siglo XIX, ve los cambios como la liberación de América del Sur de las garras del imperio estadounidense. Pero independientemente de cómo se los vea en sus términos ideológicos, el impacto de esta fuente alternativa de financiamiento ha sido enorme en cuanto a la habilidad de los gobiernos para ignorar las presiones de Washington. Es posible que esta tendencia continúe a menos de que surja un repentino y muy grave colapso de los precios del petróleo.

Ajustes en la economía estadounidense y el rol de China

Existen otros dos cambios económicos importantes que van a reforzar el alejamiento de América Latina de Estados Unidos en los próximos años. Uno es que Estados Unidos ya no va a proporcionar un mercado de rápido crecimiento para las exportaciones de la región como sucedió en el pasado. La razón es que Estados Unidos enfrenta un déficit comercial récord que ya supera el 6 por ciento del PIB, que como casi todos los economistas reconocen, deberá ajustarse a lo largo de la próxima década. Y como Estados Unidos tiene un desequilibrio comercial, el déficit deberá reducirse hasta un nivel que permita que se establezca la deuda externa, para que deje de seguir creciendo a un ritmo explosivo. Si el déficit comercial de Estados Unidos fuera a permanecer en su nivel actual, en 18 años su deuda extranjera superaría el valor de la totalidad del mercado bursátil.

Esto no va a suceder; al contrario, el dólar va a caer y el déficit se va a reducir. Pero una de las consecuencias de este ajuste es que el mercado de Estados Unidos para las importaciones, medido en divisas distintas al dólar, apenas crecerá o incluso se reducirá. Esto significa que los países latinoamericanos que esperan ampliar sus exportaciones a Estados Unidos en el futuro cercano, básicamente tendrán que desplazar a otros exportadores lo que va a ser sumamente difícil. Eso significa también que por un lado, Estados Unidos no tendrá mucho que ofrecer en los tratados bilaterales de comercio que está promoviendo. Por otro lado, está exigiendo concesiones que son económicamente costosas, como sucede con el sector de las medicinas patentadas, donde Washington insiste en obtener un proteccionismo aún mayor del que proporciona la Organización Mundial de Comercio; y es políticamente costoso, como sucede en el caso de la agricultura, donde las demandas de apertura a las exportaciones subsidiadas de Estados Unidos han encendido una considerable oposición política en la mayoría de los países de la región.

Además de la pérdida de velocidad y subsecuente estancamiento del mercado de importaciones estadounidense, el otro cambio importante que incrementará la independencia de América Latina es la apertura y el crecimiento del mercado chino (que se estima será de aproximadamente 1 billón de dólares en la próxima década).

Tal vez, y aún de manera más importante, China tendrá el potencial de convertirse en una enorme fuente alternativa de financiamiento para la inversión en América Latina. Hasta ahora los chinos procedieron de manera relativamente lenta, pero han discutido planes para canalizar inversiones con valor de 20 mil millones de dólares hacia Argentina, por ejemplo, donde las principales inversiones serán en redes ferroviarias e infraestructura.

El gobierno chino actualmente mantiene más de 800 mil millones de dólares en reservas monetarias internacionales. La mayor parte de este dinero está invertido en bonos del tesoro estadounidense, donde el gobierno ha perdido decenas de miles de millones de dólares en los últimos años – tanto por fluctuaciones en el tipo de cambio, porque el dólar ha caído en relación con otras divisas, como por pérdidas de capital debido a que han subido las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos. Es posible que estas tendencias continúen. Hasta ahora, los chinos han tenido estos bonos como parte de su estrategia económica general que presumiblemente ha incluido mantener presión a la baja en las tasas de interés de largo plazo de Estados Unidos con el fin de apoyar la recuperación económica estadounidense (eso sucede desde el 2001) con tal de aumentar la demanda para sus exportaciones.

Pero esta estrategia no va a persistir de manera indefinida. Como están las cosas ahora, los chinos podrían invertir cientos de miles de millones de dólares en América Latina, obteniendo un rendimiento cero sobre sus inversiones, y aún así tener mejores resultados que con su actual

estrategia de tener bonos del tesoro estadounidense. Lo que sucedería en realidad es que muy posiblemente obtendrían un rendimiento positivo. Los chinos ya están interesados y están invirtiendo en energía y en industrias extractivas para garantizar el suministro de estos materiales para su economía en auge.

Pero como una superpotencia económica emergente, China también puede considerar a la inversión en América Latina como parte de su interés estratégico para estrechar lazos políticos y económicos con la región. Esto podría garantizarse si empeoran las actuales tensiones entre Estados Unidos y China, pero la inversión en la región se dará muy probablemente de cualquier manera.

La energía y las industrias extractivas de América Latina

La energía y las industrias extractivas de América Latina también se han visto profundamente afectadas por el cambio en las relaciones de poder en la región, y eso tiene importantes implicaciones económicas y políticas.

A pesar de que el incremento en los precios de la energía ha dado fuertes incentivos a los gobiernos de la región – incluyendo a Venezuela, Bolivia y Ecuador – para renegociar sus contratos y acuerdos legales con las corporaciones extranjeras, dichas acciones serían más riesgosas y probablemente menos exitosas si el consorcio FMI y el gobierno de Estados Unidos tuviese el poder que ejerció sin problemas hace apenas unos años.

En Venezuela, el 16 de mayo, el congreso votó para duplicar el pago de derechos para las coinversiones con petroleras extranjeras, del 16,7 al 33,3 por ciento, con lo que se incrementaría a 50 por ciento la participación total del gobierno. Este fue el segundo incremento importante para la producción de crudo pesado, que hace apenas unos cuantos años pagó derechos de tan sólo el 1 por ciento. El gobierno también está exigiendo una participación accionaria del 60 por ciento en cuatro coinversiones con petroleras extranjeras que participan con aproximadamente una quinta parte de la producción de Venezuela.

En Bolivia, aún antes del decreto de nacionalización del 1.º de mayo, la ley de hidrocarburos del año pasado ya había agregado cientos de millones de dólares a los ingresos del gobierno al elevar los impuestos y el pago de derechos.

En Ecuador, el pasado 16 de mayo, el gobierno anunció que confiscaría un bloque petrolero asignado a Occidental Petroleum, la cuarta petrolera más grande de Estados Unidos, como resultado de la disputa en la que se argumenta que Occidental transfirió ilegalmente acciones del bloque que operaba en Ecuador a una empresa canadiense. Washington respondió casi de inmediato anunciando que suspendía negociaciones con Ecuador para el propuesto tratado bilateral de libre comercio. No queda claro hasta qué punto esto es un castigo – las negociaciones ya se habían convertido en una gran pérdida de capital político para el gobierno. En marzo, grupos indígenas protagonizaron 11 días de protestas – que incluyeron bloqueos de carreteras importantes – para pedir un alto a las negociaciones así como un referéndum nacional para saber si se debe proceder. Las protestas se suspendieron sólo después que el gobierno declaró al país en estado de emergencia. El 28 de mayo, el presidente Chávez anunció que se reuniría con el presidente Palacio de Ecuador para ampliar los lazos energéticos entre estos dos países y sus petroleras estatales, PDVSA y Petroecuador. Uno de los acuerdos propuestos permitiría que Ecuador ahorre unos 300 millones de dólares al año.

El control nacional sobre la energía y otros recursos naturales – así como las demandas para que estos recursos sean utilizados en beneficio de la mayoría de los pobres – jugaron un papel importante en las movilizaciones a las urnas electorales tanto en Venezuela como en Bolivia.

En Venezuela la demanda para estos cambios fueron la fuerza de impulso: aunque Venezuela ha tenido una empresa paraestatal desde 1976, hacia la década de los Noventa estaba generando tan pocos ingresos al gobierno que la empresa estatal no era fiscalmente viable. Algo tenía que suceder para cambiar esta situación, y no fue sino hasta que el gobierno electo de Hugo Chávez después de enfrentar un golpe militar apoyado por Estados Unidos (2002) así como una huelga petrolera (de diciembre de 2002 a febrero de 2003) devastadora para la economía, tomó el control de su propia industria nacionalizada.

En Bolivia, el descontento masivo por la privatización y los saqueos de los recursos naturales del país ayudaron a derrocar a dos presidentes y contribuyeron a la elección de Evo Morales.

En Perú, el candidato populista Ollanta Humala ocupó la delantera en la primera ronda electoral, en parte porque prometió obtener una mayor participación de las compañías extranjeras de minería y de energía, y usar esos recursos en beneficio de los pobres. Como algunas de las más grandes compañías de minería que operan allí estaban exentas en conjunto del pago de derechos o regalías (aunque paguen otros impuestos), había un amplio espacio para la negociación.

La lucha de varios gobiernos para capturar más rentas energéticas y de recursos naturales, muy posiblemente continuará. La recién fundada independencia económica y política de América Latina ha incrementado su poder de negociación, y disminuido las razones para extender concesiones a productores extranjeros más allá de las necesarias para que el estado pueda aprovechar de las transferencias tecnológicas. El cambio en las relaciones de poder ha proporcionado miles de millones de dólares de ganancias en la región y todo indica que aún hay más ingresos por venir.

Un futuro más brillante- logros de Argentina, Venezuela y Bolivia

A pesar de la consternación de Washington, el colapso de la influencia de Estados Unidos en América Latina ha comenzado a brindar resultados positivos tangibles e importantes.

Argentina

En Argentina, casi 8 millones de personas – el 18 por ciento de la población – ha sido sacada de la pobreza como resultado de una rápida recuperación económica, a pesar de que la mayoría de los economistas y de la prensa anticipara diariamente su fracaso desde que dicha reactivación comenzó hace cuatro años. Para poder lograr este extraordinario éxito económico, el gobierno tenía que implementar cierto número de políticas económicas no ortodoxas que fueron objeto de una vehemente oposición del FMI, quien las calificó en su mayoría de imprudentes y equivocadas a través de la prensa internacional de negocios. Estas políticas incluyeron, no sólo las difíciles negociaciones para terminar con unas dos terceras partes de la deuda pública externa, sino también medidas macroeconómicas que eran esenciales para lograr la recuperación como el hecho de mantener una tasa de cambio estable y competitiva así como tasas de interés más bajas.

El gobierno argentino también se rehusó a elevar las tarifas de los servicios públicos como pedían los propietarios extranjeros y sus gobiernos (teniendo al FMI como su abogado). Más recientemente, el gobierno de Kirchner instituyó controles de precios para combatir la inflación para así no tener que sacrificar el empleo y los ingresos desacelerando la economía, como ha sido la norma en la política macroeconómica.

La recuperación Argentina es un logro extraordinario que ha ayudado a iluminar el sendero hacia la independencia regional y que sigue floreciendo en un nuevo entorno. Ahora es más fácil percibir cómo la economía se hubiera debilitado o incluso cómo hubiera colapsado por completo si el gobierno se hubiese limitado simplemente a seguir las políticas ortodoxas aceptadas en el pasado. En el ámbito de derechos humanos, Argentina ha alcanzado también grandes logros. Kirchner ha sido homenajeadado por importantes grupos de defensa de los derechos humanos por revocar las leyes que daban impunidad a los militares que cometieron atrocidades durante la brutal dictadura de 1976 a 1983.

Venezuela

Venezuela también ha alcanzado notables éxitos, principalmente al proporcionar por primera vez servicios gratuitos de salud a un 54 por ciento de la población en su mayoría pobre, por subsidiar alimentos a más del 40 por ciento de venezolanos y por incrementar el acceso a la educación.

Es común atribuir estos éxitos a los elevados precios del petróleo, sin embargo en la década de los setenta, en términos reales, éstos fueron aún más elevados, mientras el PIB por persona cayó.

Chávez es mejor conocido – y atacado – en la prensa internacional por su enfrentamiento con la administración Bush, pero en casa su inamovible popularidad se explica principalmente por cumplir su promesa de gobierno de compartir la riqueza petrolera con la mayoría de los venezolanos.

Pero aún si hacemos a un lado el asunto de la distribución, habrá que recordar que Venezuela sufrió uno de los peores retrocesos económicos de la región (y del mundo) – una caída del 35 por ciento en el ingreso per cápita de 1970 a 1998, antes de la elección de Chávez. El gobierno actual, que asumió el poder en 1999 y que es casi seguro que será reelegido en diciembre, será probablemente recordado como el que finalmente revirtió el prolongado deterioro económico de Venezuela. La economía se ha recuperado de manera notable después que la estabilidad regresó finalmente al país, luego de varios intentos de derrocar al gobierno por medio de golpes militares y huelgas petroleras. En el 2004, el crecimiento del PIB en Venezuela fue de un asombroso 17,8 por ciento, y en el 2005 fue de 9,8 por ciento.

Bolivia

Bolivia también luce en condiciones de revertir el prolongado estancamiento económico y comenzar a satisfacer las necesidades de los pobres, mayoritariamente indígenas. El gobierno ha creado un nuevo ministerio para la administración del agua con el fin de proporcionar a todos agua limpia para beber, así como agua para la agricultura. Los ingresos crecientes derivados del control de sus recursos naturales impulsarán el proyecto, así como la reforma agraria propuesta y otros programas factibles.

El desafío de los nuevos gobiernos:

La corrupción y la débil capacidad del estado

Por supuesto que todos estos gobiernos tendrán que pasar por un extenso camino para lograr una estrategia de desarrollo sustentable y de largo plazo. Después de varias décadas de gobiernos corruptos y de deliberado adelgazamiento de la capacidad del estado para regular la economía y la toma de decisiones, los gobiernos de la región aún no cuentan con una adecuada capacidad administrativa de planificación, y mucho menos de implementación.

Esto explica como en Venezuela, donde el Presidente Hugo Chávez habla de un “socialismo del siglo XXI”, el sector privado tiene actualmente una mayor participación en la economía de la que tuvo antes de que Chávez llegara al poder. El gobierno de Venezuela, contrariamente a lo que se cree a nivel popular, se ha embarcado en un proyecto de reformas graduales, experimentando con la reforma agraria, con algunas cooperativas de producción y crédito y con programas de micro créditos. Sin embargo, los funcionarios de gobierno están muy concientes de las limitaciones del corrupto y débil gobierno que heredaron.

En Argentina, que cuenta con una economía más desarrollada, poco o nada queda del tipo de planificación de desarrollo y de políticas industriales que conduzca hacia un crecimiento sostenido al estilo de los éxitos asiáticos, o incluso al estilo de América Latina antes de la década de los Ochenta.

No obstante, la reanudación del crecimiento económico que fue posible gracias a políticas económicas más razonables constituye un paso inicial clave. Se trata de una condición necesaria, pero no suficiente, para el progreso económico y social de la región a largo plazo. Y es posible que más cambios sigan a medida que nuevos experimentos logren el éxito.

El creciente control sobre la energía y los recursos naturales, y un nuevo compromiso con la reducción de la pobreza, con el cuidado de la salud y con la educación – como sucede en Venezuela y Bolivia – también son primeros pasos importantes, no sólo por lo que en sí representan, sino también por el bien de la democracia.

El concepto de democracia

Aunque tanto los gobiernos de Morales como el de Chávez son acusados de autoritarismo por sus opositores – que en el caso de Venezuela incluye a la mayoría de quienes tienen acceso a los medios de comunicación de mayor difusión – desde un punto más objetivo, lo que estamos atestiguando es un renacimiento de la democracia. En otras palabras y con relación a las políticas sociales y económicas, el pueblo está recibiendo en realidad aquello por lo que votó. Es por esta razón que Venezuela ocupó el primer lugar cuando una de las mejores empresas encuestadoras de América Latina, Latinobarómetro, le preguntó a la gente qué tan democrático era su gobierno. A la pregunta de qué tan satisfecha estaba la gente con la democracia de su país, Venezuela ocupó el segundo lugar después de Uruguay.

Irónicamente, los países latinoamericanos en la era de los dictadores tenían más control sobre sus políticas económicas que el que han mantenido desde la democratización formal. Bajo las dictaduras, por lo tanto, hubo un desarrollo mucho más exitoso y una mejoría de los niveles de vida. Esto explica, en parte, la tendencia de largo plazo – que ahora empieza a revertirse – de una continua pérdida de respeto hacia la democracia por parte de la ciudadanía en América Latina, después de experimentar 25 años de erosión en su calidad de vida bajo el mando de gobiernos democráticos.

Afortunadamente, el descontento, la organización y las movilizaciones – a niveles masivos – en las urnas no se ha canalizado hacia un regreso a los gobiernos autoritarios sino más bien hacia un gobierno legítimamente representativo, con exigencias de una ampliación de la democracia para que incluya también las políticas sociales y económicas así como una creciente participación de grupos previamente marginados como los pobres en Venezuela y los indígenas en Bolivia. Las recientes protestas masivas en Ecuador contra las propuestas de negociaciones comerciales con Estados Unidos también deben ser miradas bajo la misma lupa. Del mismo modo, las olas de organizaciones masivas que llevaron a Evo Morales al poder, están activamente estimulando al gobierno para que impulse políticas económicas a favor de los pobres y de los indígenas.

Los cambios en la región y su relevancia en Brasil

Pero no es solamente en los países que han cambiado sus políticas económicas y sociales donde este notable cambio de las relaciones hemisféricas es importante. Tomemos el caso de Brasil que sigue siendo el ejemplo clásico de las fallidas políticas “neoliberales” en América Latina.

Brasil fue alguna vez un país en desarrollo con un rápido crecimiento económico: el ingreso per cápita creció 123 por ciento de 1960 a 1980. Sin embargo en los últimos 25 años, ese indicador apenas promedió un 0,5 por ciento anual. El actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y representante del partido de izquierda, Partido de los Trabajadores (PT), fue elegido en 2002 con una plataforma que prometía restaurar el crecimiento económico (a través de tasas de interés más bajas), implementar políticas industriales y agrícolas, así como regresar a una estrategia nacional de desarrollo. El PT también prometió aplicar políticas de redistribución del ingreso que ayudaran a los pobres, en un país que posiblemente tiene la distribución del ingreso más desigual del planeta. Sin embargo, desde que asumió el poder, Lula ha mantenido firmemente las políticas económicas de su predecesor, Fernando Enrique Cardoso, y obteniendo así el mismo lánguido crecimiento. Las tasas de interés que establece el Banco Central están actualmente en 15,75 por ciento (en comparación con el 5 por ciento de las tasas de interés estadounidenses, después de que la Reserva Federal las elevó en 16 ocasiones consecutivas). La moneda brasileña, el Real, está muy sobrevaluada, lo que hace a las importaciones artificialmente baratas, y por consiguiente dificulta la competitividad de la industria en los mercados nacionales e internacionales. Y sumándose a esto, el gobierno federal está pagando la deuda anualmente a un ritmo equivalente a más del 7 por ciento del PIB, dejando pocos recursos para los fondos de los programas para combatir la pobreza.

Pero lo que es importante entender, es que este desempeño es el resultado de las propias políticas internas de Brasil en las que, hoy en día, Estados Unidos tiene poco que ver. En casi todos y cada uno de los países existen conflictos de interés en torno a las políticas económicas, especialmente en relación a las políticas monetarias, entre el sector financiero y casi todos los demás. Los tenedores de bonos, los bancos y los acreedores no tienen, por lo general, el mismo interés en el crecimiento económico que la mayoría de la gente. Para la vasta mayoría de las personas, un crecimiento económico más rápido se traduce en mayores oportunidades de empleo y en mayores ingresos. Para el sector financiero, sin embargo, el crecimiento económico es visto primeramente como una amenaza de inflación creciente que disminuye el valor de los bonos. Este es un conflicto de interés que también existe en Estados Unidos, debido a que el Banco Central sube en ocasiones las tasas de interés y reduce el ritmo de crecimiento de la economía cuando en realidad la mayor parte de la gente que está apostando por el crecimiento económico, no lo haría.

Brasil es un caso extremo de este problema, en cuanto que este excesivo dominio político del sector financiero – que prevalece en todos los principales partidos políticos – ha llevado al país hacia un prologando periodo de estancamiento y de bajo crecimiento económico del que no parece

reponerse. En el sector financiero, el crecimiento anual del 2,3 por ciento (aproximadamente el 1,2 por ciento por persona) para el 2005 está considerado como apropiado, aun si éste no permite crear suficientes empleos para quienes acaban de ingresar a la fuerza de trabajo.

Washington está encantado con el gobierno de Lula, y le ha brindado apoyo en momentos claves como el del escándalo de corrupción que ha logrado que el gobierno pierda credibilidad y apoyo popular provocando la renuncia del ministro de finanzas, del ministro de gobierno y de altos funcionarios de su partido. Sin embargo, los mercados financieros al igual que Washington y la prensa internacional están muy satisfechos. Pero a su vez están muy nerviosos ante la perspectiva de que Lula sea sometido a juicio político porque su vicepresidente, el conservador José Alencar, se ha comprometido a bajar las tasas de interés. A pesar de que el apoyo internacional a las actuales políticas económicas es evidente, apenas exista un gobierno brasileño que decida tomar otra dirección, nadie podrá hacer lo suficiente como para prevenir este cambio. El pasado diciembre, Brasil pagó la totalidad de su deuda con el FMI, la cual constituía, a nivel mundial, una de las deudas más grandes con el Fondo, por un monto de 15 mil 600 millones de dólares.

Por otro lado, el gobierno de Lula no ha brindado su total apoyo a la política comercial de Estados Unidos. De echo, Brasil se convirtió en uno de los líderes de la rebelión de Cancún en el año 2003, cuando los países en vías de desarrollo decidieron que no estaban dispuestos a negociar más concesiones a favor de los países ricos en la Organización Mundial de Comercio si éstos no estaban dispuestos a reducir sus subsidios agrícolas. (La delegación brasileña fue más conciliadora en la última reunión ministerial de la OMC en Hong Kong.) Además Brasil, junto con Argentina y Venezuela, ha rechazado enérgicamente la propuesta de un Acuerdo de Libre Comercio para las Américas después de diez años de negociación. El rechazo de este bloque de países ha prácticamente condenado dicho tratado al fracaso.

La independencia de América Latina ya se está sintiendo también en otras instituciones multilaterales. Chile y México, dos gobiernos a los que la administración Bush considera como sus favoritos, aniquilaron la resolución que propuso Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU para dar legalidad a la invasión de Irak. Otro ejemplo es el fracaso de Washington, por primera vez en seis décadas, en intentar elegir un candidato para encabezar la Organización de Estados Americanos (OEA) en mayo de 2005. Después de dos fallidos intentos de Washington, el organismo eligió a José Miguel Insulza, quien contó con el apoyo de Brasil, Argentina y Venezuela. La OEA se reunió en junio de 2005 y prontamente rechazó una propuesta de Estados Unidos para enmendar la Carta Democrática Interamericana que habría dado a dicha organización el poder para evaluar el funcionamiento de las instituciones democráticas en los países miembros, una acción que fue ampliamente interpretada como una dedicatoria especial en contra de Venezuela.

Washington se enfrenta a Venezuela

En los círculos de política exterior de Estados Unidos, las formas de reaccionar a la nueva independencia de América Latina han sido diversas. La causa principal del cambio electoral – el fracaso de largo plazo sin precedentes del crecimiento económico en la región – casi nunca se menciona, a pesar de que es un hecho ampliamente conocido por los economistas. En su lugar, lo que sí es ampliamente reconocido es que las reformas han sido “decepcionantes,” o que no fueron capaces de reducir la pobreza. El aumento del nacionalismo y en particular del “populismo” es visto como un fenómeno cíclico, que correrá su curso en la medida en que estos gobiernos ahuyenten la inversión extranjera, que induzcan una “crisis de deuda” al gastar desmesuradamente, y a medida que impulsen, en general, políticas económicas fallidas. La recuperación económica de Argentina ha sido

enterrada tantas veces en la prensa de negocios durante los últimos cuatro años que casi parece un milagro que haya sobrevivido.

El distanciamiento de América Latina y la falta de atención de Washington en el hemisferio es interpretado como el resultado de la preocupación de la administración Bush en el Medio Oriente, en particular en la guerra en Irak. La administración es criticada por su “falta de atención,” por recortar la ayuda exterior, por alienar a muchos latinoamericanos con la guerra en Irak, por pedir que los estadounidenses sean eximidos de tener que comparecer ante la Corte Criminal Internacional como condición para proporcionar ayuda militar, por no lograr avances en la reforma a las leyes de inmigración, y por otros errores.

Se considera que Venezuela está compitiendo por lograr influencia en la región sobre la base de sus ingresos petroleros. De acuerdo a este punto de vista, su influencia y su crecimiento económico, así como sus programas sociales para los pobres, se colapsarán cuando caiga el precio del petróleo.

Las élites de política exterior también dividen a los líderes electos de la izquierda entre “amigos de los mercados” versus “populistas” o entre “Izquierda Correcta” versus “Izquierda Incorrecta,” en las palabras de Jorge Castañeda publicadas en la edición de mayo / junio de 2006 en *Foreign Affairs*. La “Izquierda Incorrecta” son Chávez, Morales y Kirchner – coincidentemente aquellos que han cumplido la mayoría de sus promesas electorales; la “Izquierda Correcta” son Lula de Brasil, Bachelet de Chile y Tabaré Vázquez de Uruguay. Y es Chávez quien se ha convertido en el peor enemigo de Washington, eclipsando incluso a Cuba como el demonio que tendrá que ser vencido. A pesar de que se reconoce que la administración Bush ha manejado mal el tema de Venezuela, el gobierno de Chávez sigue siendo presentado en la mayor parte del espectro político, y especialmente en la prensa, como “antidemocrático,” “autoritario” y como una amenaza para la región. Estas interpretaciones son, en parte, el resultado del peculiar sistema electoral que tenemos en Estados Unidos, que da a 900 mil cubano-estadounidenses en el estado clave de Florida una influencia desproporcionada en la carrera presidencial y en la política exterior hemisférica. Pero las interpretaciones se basan principalmente en ignorancia y en una de las peores etapas de periodismo de política exterior en Estados Unidos en décadas.

En realidad, quien quiera que haya visitado Venezuela en años recientes podrá verificar que allí sigue existiendo, a pesar de la extrema polarización política y el caos que angustió al país hasta hace poco, una de las sociedades más abiertas y democráticas del continente. La vasta mayoría de la prensa, incluidas las grandes estaciones de televisión, son controladas por la oposición. Es la prensa más antigubernamental del hemisferio e impulsa campañas políticas que no serían autorizadas en la mayoría de las democracias occidentales. Incluso en Estados Unidos se retomaría la Doctrina de lo Justo (“Fairness Doctrine”) si cualquiera de las principales cadenas de medios de comunicación se transformase en protagonista político como sucede en Venezuela, y eso sin mencionar la participación activa de la prensa venezolana en un golpe militar y en otros intentos de derrocar al gobierno. Al estado venezolano se le puede asignar cualquier categoría, menos la de autoritario – de hecho en lo que se refiere al cumplimiento de la ley, este tiende más a ser un estado anárquico, un estado débil que sufre por todos los problemas que agobian al resto de América Latina. Es por esto que las principales víctimas de la represión en Venezuela no son los partidarios de la oposición, aquellos que han tratado de derrocar al gobierno, sino más bien los activistas pro-gubernamentales que se organizan para la reforma agraria en las zonas rurales, quienes han sido asesinados por paramilitares al servicio de los terratenientes. El estado no puede hacer cumplir la ley ni siquiera contra los asesinos, ni siquiera para proteger a sus propios partidarios.

Ninguna organización de derechos humanos respetable podría afirmar que la democracia, los derechos humanos o las libertades civiles se han deteriorado bajo el gobierno de Chávez, ni que

pueda ser comparada desfavorablemente con el resto de la región en esas áreas. Sin embargo, la administración Bush ha creado una imagen de que Venezuela tiene un gobierno antidemocrático y se las ha arreglado para hacerla aparecer así a través de los medios de difusión.

La administración estadounidense también ha tratado de aislar a Venezuela, pero sólo ha conseguido aislarse a sí misma en América Latina. Recientemente la guerra de palabras entre Venezuela y Estados Unidos se ha vuelto más candente. El pasado mes de marzo, el secretario estadounidense de la Defensa, Donald H. Rumsfeld, comparó a Chávez con Hitler. Chávez respondió comparando al presidente Bush con Hitler y dándole a sus declaraciones un nivel de enemistad similar. Todo indica que esto va a continuar, pues para Chávez la retórica anti-Bush y anti-imperialista funciona bien tanto en casa como en la mayor parte de la región. Como Larry Birns, del Consejo de Asuntos Hemisféricos (Council on Hemispheric Affairs), en Washington, hizo notar en un reciente informe ante el congreso, “[Chávez se ha convertido en] el alcalde de la calle latinoamericana.”

El hecho de que Chávez sea capaz de aumentar su popularidad con este tipo de posturas de confrontación habla enormemente de la forma en que la política exterior de Estados Unidos es percibida en la región. Mientras que para Chávez no hay nada que perder, la administración Bush ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para dañar y derrocar a su gobierno, y lo seguirá haciendo, independientemente de lo que diga o haga.

Es fácil comprender esta postura de oposición si uno mira la reciente evidencia histórica. Primero, la administración Bush no sólo apoyó públicamente el golpe militar de abril de 2002 en contra de Chávez, sino que además participó activamente para tratar de lograr que el golpe tuviera éxito. Basta revisar los documentos de la CIA de marzo y abril de 2002, para confirmar que la administración Bush tenía información previa del golpe que se preparaba. Cuando finalmente ocurrió, los voceros tanto de la Casa Blanca como del Departamento de Estado negaron públicamente que se dio un golpe de estado, afirmando falsamente que el presidente Chávez había renunciado, y que antes de renunciar había convenientemente despedido a su vicepresidente y a su gabinete – a fin de que el líder de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) pudiera asumir el poder y proceder a disolver el Congreso, la Corte Suprema y la Constitución. El hecho de que funcionarios de la administración Bush habían tenido conocimiento previo del golpe y aún así mintieran públicamente sobre lo que realmente estaba pasando, con el fin de ayudar al éxito del golpe, es una forma de participación que ha pasado casi desapercibida en Estados Unidos.

Evidencia más contundente proviene, primero, de la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado (State Department Office of the Inspector General), que descubrió que el Fondo Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED), el Departamento de la Defensa (Department of Defense, DOD) y otros programas de asistencia proporcionaron entrenamiento, asistencia para la creación de instituciones, y otros tipos de apoyo a individuos y organizaciones consideradas como activamente involucradas en la breve expulsión del gobierno de Chávez y segundo, de Jorge Castañeda, quien declaró que “hubo una proposición de Estados Unidos y España para emitir una declaración conjunta con México, Brasil, Argentina y Francia que reconozca al gobierno del [líder golpista] Pedro Carmona”. La evidencia documental, combinada con las propias declaraciones de la administración no dejan duda sobre su participación.

Todo lo anterior ha sido ignorado casi por completo por los principales medios de comunicación, y cuando se menciona, es bajo la forma de una “acusación” del propio Chávez – no muy creíble – de que Estados Unidos participó en el golpe. Más aún, Washington no reconoció su error ni cambió de curso después de apoyar el golpe, sino que más bien apoyó tácitamente la devastadora huelga petrolera de la oposición entre 2002 y 2003, que irónicamente, por primera vez, interrumpió los

suministros de petróleo a Estados Unidos y elevó aun más el precio local de la gasolina. Este hecho demostró nuevamente hasta dónde Washington estaba comprometido a lograr un “cambio de régimen” en Venezuela, por cualquier medio necesario.

El compromiso continuó y se afirmó con el financiamiento para el referéndum presidencial de Venezuela en el año 2004, en el cual Chávez ganó de manera asombrosa. A este punto, diversos gobiernos latinoamericanos y europeos que habían permanecido a la expectativa, pidieron al Departamento de Estado que se diera por vencido – que éste era un gobierno legítimo y democrático con el que tendrían que aprender a convivir. Pero este no lo hizo.

La administración Bush volvió al ataque con una serie de sanciones económicas en contra de Venezuela (a través, por ejemplo, de instituciones multilaterales) que, en la medida en que los precios del petróleo seguían incrementándose, no tenía impacto alguno en Venezuela que no fuera inflamar aún más las pasiones políticas. El pasado mes de diciembre, la oposición venezolana boicoteó las elecciones nacionales, a pesar de las declaraciones de la OEA y de los observadores de la Unión Europea que señalaban que se había cumplido con las demandas de la oposición y que se esperaba que ésta participara. Una vez más, Washington mostró su apoyo tácito, lo que demuestra – más que cualquier acción reciente como las sanciones económicas, el bloqueo de la venta de aviones militares y de botes patrulla de Brasil y España, y de otras provocaciones – la firmeza con la que la administración Bush y sus aliados en la oposición venezolana, están comprometidos en desestabilizar y derrocar al gobierno.

La oposición pudo haber ganado un estimado 30 por ciento de la Asamblea Nacional Venezolana pero – con la bendición de Washington – cedió esta posibilidad solamente para establecer la pretensión de que Venezuela es un estado con un sólo partido. Y es así como han construido una realidad Orwelliana, con ayuda de los medios de comunicación, que ahora reportan que “el Congreso está completamente controlado por el Presidente Chávez.” El lector no está informado de que esto se debe únicamente a que la oposición, de manera deliberada y sin ninguna razón legítima – de acuerdo a los observadores de la OEA y de la Unión Europea – se negó a participar en un proceso electoral democrático y transparente.

Estos detalles son importantes porque muestran hasta qué punto Washington está obsesionado con las estrategias y las tácticas del pasado, y hasta qué punto nuestros líderes están divorciados de la nueva realidad en el hemisferio. De hecho, basta mirar el informe del Comité Eclesiástico del Senado estadounidense de 1975, sobre los esfuerzos de desestabilización de la CIA encaminados al derrocamiento de un gobierno electo en 1973, para apreciar que éste muestra un notable parecido con los acontecimientos de 2001-2003 en Venezuela. Lo único que hay que hacer es cambiar el nombre de Allende por el de Chávez, el nombre de Chile por el de Venezuela, y cambiar el nombre National Endowment for Democracy y el de USAID por el de CIA, así como una huelga de transportistas en Chile por la de una huelga petrolera en Venezuela. En ambos casos, la oposición tiene el control de los medios de comunicación para poder culpar al gobierno de cualquiera de los problemas económicos, incluso aquellos que fueron causados por la oposición; sin olvidar la manipulación de la prensa internacional para presentar a un gobierno socialdemócrata electo como déspota y comunista.

Pero este es un nuevo mundo, Chávez sigue siendo jefe de estado, sin que el país haya tenido que sacrificar libertades civiles ni derechos democráticos, y a pesar de todo lo que ha tenido que soportar.

La nueva realidad es que la democracia está aquí para quedarse. Pues tal como dijo el Secretario General de la OEA, General José Miguel Insulza al periódico Financial Times el pasado 22 de mayo,

“América Latina no es un bebé. Cuando la izquierda o la derecha ganan en Europa, nadie se pronuncia sobre el destino de ese continente ni nada por el estilo. Ustedes tienen que dejar que el proceso político siga su curso.” Eso precisamente es lo que Washington está menos dispuesto a hacer. Negarse a aceptar los resultados de las elecciones democráticas en Venezuela será para Washington una postura constante en el futuro previsible, y pocos líderes de América Latina, si se da el caso, querrán ser vistos del lado de la administración Bush en esta continua disputa.

Diferencias en la región no alteran tendencia

De manera más reciente, los medios de comunicación en Estados Unidos han hecho de las disputas de los países de América Latina, un tema noticioso de gran importancia, adelantando la idea de que los actuales enfrentamientos dentro de la región opacarán los esfuerzos a favor de la integración económica regional o de la cero dependencia en Estados Unidos. Y por supuesto, Chávez es descrito como un personaje que incrementa estas divisiones.

Efectivamente, no hay duda de que existan disputas legítimas y conflictos de interés: Argentina y Brasil deben acordar con Bolivia los términos y condiciones del gas natural que de esta nación reciben; Argentina y Uruguay se disputan por el potencial daño ambiental que pueden causar dos fábricas de papel en la porción uruguaya del Río Uruguay; el gobierno de Vicente Fox en México se ha enfrentado a Chávez desde que aquel respondió a un ataque de Fox en noviembre pasado llamándolo “cachorro del imperialismo;” Perú retiró a su embajador de Caracas en protesta porque Chávez respaldó a Ollanta Humala en la actual elección; y el ganador, el ex presidente Alan García denunció a Chávez a lo largo de toda su campaña así como en su discurso de toma de posesión.

Sin embargo, lo más probable es que ninguna de estas diferencias altere las tendencias generales hacia un nacionalismo creciente, una cooperación regional y la independencia de Estados Unidos.

En general, existe una postura de apoyo de los líderes de Brasil, Argentina y hasta Chile ante Bolivia y Venezuela.

Después de que Bolivia nacionalizó su industria energética el 1.º de mayo, la prensa brasileña incitaba a Lula para que iniciara una disputa con Morales a nombre de Petrobrás, el gigante energético brasileño y el mayor productor de gas boliviano. Las presiones sobre Lula se volvieron tan intensas que éste declaró a la prensa: “No he tenido ninguna disputa con George W. Bush; ¿porqué habría de pelear con Evo?” De hecho, una disputa con Evo Morales habría resultado sumamente desconcertante para la base política de Lula, que ve a Morales como un héroe, como un campeón de los derechos indígenas y de los pobres. El 4 de mayo Lula se reunió con Morales, Kirchner y Chávez y los tres emitieron una declaración para respaldar el “derecho soberano” de Bolivia para nacionalizar sus recursos energéticos. Probablemente no le molestó a nadie el hecho de que Venezuela esté comprando buques petroleros a Brasil por un valor de 3 mil millones de dólares, lo que permitirá crear unos 10 mil empleos en época de elecciones, o que Venezuela esté prestando 2 mil 500 millones de dólares a Argentina.

En reiteradas ocasiones Lula ha defendido públicamente a Chávez y a su gobierno. “Un presidente que gana las elecciones, logra la aprobación de una constitución y propone un referéndum de su propia presidencia, lleva a cabo un referéndum y gana nuevamente la elección; nadie puede acusar a ese país de no tener una democracia”, dijo en septiembre pasado. “De hecho podría decirse que lo que tiene es un exceso de democracia”.

Lo mismo hizo Kirchner: el pasado 21 de mayo, mientras que las publicaciones sobre la desunión latinoamericana alcanzaban su cumbre en la prensa estadounidense, Kirchner dijo a los medios de comunicación: “Creo que Chávez está trabajando con determinación a favor de la integración latinoamericana; sus relaciones con Argentina han sido admirables y solidarias... los argentinos deben sentirse muy agradecidos con el presidente Chávez, quien ha hecho muchas cosas buenas a favor de este país”. También dijo que nada detendría el proceso de integración regional.

Michelle Bachelet, quien es clasificada como una de las “izquierdistas buenas” según el léxico de Washington, defendió tanto a Chávez como a Morales cuando la prensa internacional hacía llover su desprecio sobre ellos en la Cumbre de la Unión Europea-América Latina y el Caribe del pasado 11 al 13 de mayo: “No me gustaría que regresáramos a la era de la Guerra Fría en la que se diabolizaba a un país o el otro,” dijo. “Lo que hemos atestiguado en estos países (Bolivia y Venezuela) es que ellos están buscando a gobiernos y a líderes que trabajen para erradicar la pobreza y eliminar la desigualdad.”

El hecho de que todos estos líderes no sólo estuvieron dispuestos a ofrecer su apoyo, sino que en algunos casos elogiaban a Hugo Chávez, quien ha llamado al presidente Bush terrorista, asesino, burro, borracho y una gran cantidad de otros calificativos que incluyen a su favorito “Mr. Danger” – en alusión a un estadounidense cruel en una famosa novela que el venezolano Rómulo Gallegos escribió en 1929 – es otra indicación de cuánto ha cambiado el hemisferio. Y todo esto se da a pesar de los esfuerzos de más de cuatro años de la administración Bush para aislar a Chávez, y de la cobertura asombrosamente negativa y parcial de la prensa venezolana.

El apoyo a las nuevas políticas en la región es también internacional. El 26 de mayo, el presidente Jacques Chirac de Francia dio todo su apoyo a la nacionalización del petróleo y del gas en Bolivia, a pesar del hecho de que el gigante energético francés Total es el tercer productor más grande afectado por esta decisión. Y elogió a Evo Morales como “un hombre que ha devuelto el honor a un pueblo que lo había perdido por siglos y siglos.”

Algunos desafíos y el avance de la nueva tendencia

La ecuación política latinoamericana podría cambiar con el colapso de los precios del petróleo, pero para revertir las tendencias actuales, la caída del precio tendría que ser de una magnitud tal que por el momento casi nadie anticipa. Venezuela ha sido bastante conservadora en su política fiscal, fijando el precio del petróleo en su presupuesto a aproximadamente la mitad del precio que se materializó el año pasado, mientras aumenta considerablemente su recaudación fiscal. El país goza de un superávit presupuestal, un superávit comercial de casi 9 mil millones de dólares y tiene más de 30 mil millones de dólares en reservas monetarias internacionales. Es poco probable que su “Banco del Sur” ad hoc incurra en bancarrota en un futuro cercano. Y ciertamente no mientras las tensiones actuales – posiblemente con otras peores por venir – entre Washington e Irán sigan sumándose a los inflamados riesgos de guerra para el suministro de petróleo desde el Golfo Pérsico.

A corto plazo se prevén posibles problemas económicos. Mientras las tasas de interés en Estados Unidos sigan subiendo, la probabilidad de que se originen fugas de capital desestabilizadoras como las que dieron origen a la crisis del peso en 1995 – cuando el Banco de Reserva Federal de Estados Unidos elevó sus tasas de interés del 3 al 6 por ciento a principios de 1994 – existe aún, si bien con menor riesgo cuando se le compara con el de las tasas de cambio fijas de los años noventa.

México en particular, es altamente vulnerable a estas políticas considerando que más del 85 por ciento de sus exportaciones se dirigen actualmente hacia Estados Unidos. Cuando estalle la burbuja en el mercado inmobiliario, las exportaciones mexicanas sin duda descenderán. Así mismo, y como se notó previamente, una aguda caída del dólar afectaría negativamente a las exportaciones de aquellos países que dependen del mercado estadounidense. Sin embargo, es poco probable que incluso los tiempos difíciles hagan que América Latina regrese a rendirle lealtad a quienes impulsan y diseñan las políticas en Estados Unidos.

En la medida en la que avance la integración económica, la influencia de Washington seguirá debilitándose. Cuando el gobierno colombiano secuestró a Rodrigo Granada, el “ministro de relaciones exteriores” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en enero pasado, Chávez estaba furioso y Washington esperaba que hubiese un grave enfrentamiento. Pero Venezuela suspendió el comercio con Colombia, y dado que Venezuela es actualmente el segundo socio comercial más grande de Colombia, el impacto se sintió inmediatamente en la economía colombiana. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, voló rumbo a Caracas y ambos presidentes solucionaron sus diferencias. A pesar de estar en bandos opuestos del espectro político, ambos han tenido relaciones notablemente buenas desde entonces, tal y como ha sucedido a lo largo de la mayor parte de la presidencia de Chávez. Uribe es el aliado más cercano de Washington en la región, y depende grandemente de la ayuda estadounidense.

Los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela, están discutiendo un propuesto gasoducto de 9,700 kilómetros de longitud con valor de 20 mil millones de dólares. Bolivia también está participando en las negociaciones, y otros países pueden ser incluidos. Este tipo de integración energética, si se materializa, serviría también para promover una mayor integración económica y política en la región.

Ejemplos exitosos de políticas económicas y sociales también encuentran la manera de difundirse. El fenomenal crecimiento económico de Argentina, que es más del doble de toda la región, no puede seguir pasando desapercibido de manera indefinida. Como tampoco pueden pasar desapercibidos los cuidados de salud gratuitos y el creciente acceso a la salud en Venezuela, que es muy probable que sean imitados en Bolivia. En Brasil, uno de los más grandes y organizados movimientos sociales del mundo, el Movimiento de los Sin Tierra (MST), mira esperanzado cómo Bolivia se embarca en lo que promete ser el mayor programa de reforma agraria en décadas.

Desde el norte, hay pocos indicios de que Washington haga, en un futuro previsible, cambios políticos relevantes para adaptarse a la nueva realidad de América Latina. Aún si los demócratas ganaran la Cámara de Representantes en el congreso estadounidense el próximo noviembre, el líder demócrata y posible presidente del Comité de Relaciones Internacionales de dicha cámara, sería Tom Lantos, quien es tan agresivo como la administración Bush cuando enfrenta este tipo de asuntos. Por lo tanto, casi con toda seguridad, la política de Estados Unidos seguirá reforzando y contribuyendo a impulsar las tendencias actuales, las cuales incluyen la pérdida de la influencia en la región.

Habrà sin duda conflictos políticos, errores, retrocesos, así como eventos inesperados a medida que los distintos países avanzan por la senda de una mayor independencia. Pero se ha alcanzado un momento cumbre y ya no habrá retroceso en el reloj. La tarea más difícil será encontrar nuevas políticas económicas y estrategias de desarrollo aplicables a cada país, después de más de un cuarto de siglo en que los gobiernos se negaron a siquiera pensar en modelos autónomos, sometiéndose en cambio mansamente a un estrecho margen de alternativas en su gran mayoría fracasadas. En esta nueva era, las alternativas políticas se han ampliado rápidamente, y las reglas del juego están cambiando mes a mes. Sin embargo, una espesa niebla ideológica, que niega la posibilidad hasta de las alternativas más modestas, todavía prevalece en las instituciones financieras internacionales, en

los bancos centrales, en los medios masivos de comunicación, y en las instituciones donde estudian la mayoría de los economistas. Los gobiernos que quieran hacer cualquier cosa distinta, como el de Kirchner en Argentina, deberán tener cierta visión, liderazgo y valor para enfrentar una fuerte oposición ideológica, así como una diversificada oposición política. Pero hasta ahora, se están desempeñando bastante bien.